

Hasta hoy el sistema de desagüe de la ciudad se encuentra colapsado y demorará unos 3 a 4 meses solucionar dicho problema, situación que está generando contaminación y malos olores en diversos lugares de la ciudad. Con el consiguiente riesgo del surgimiento de una serie de epidemias en la población iqueña.

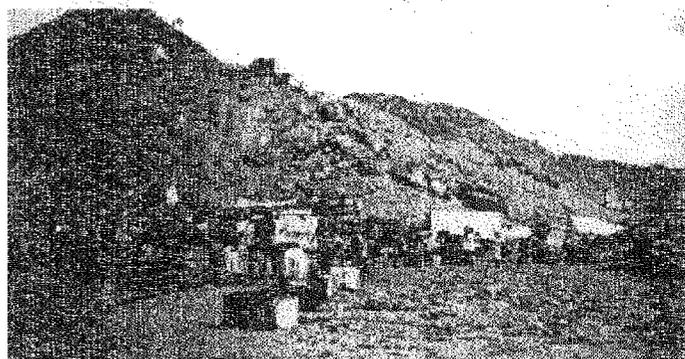
El distrito de Los Molinos y sus anexos (Tiraxi, Huamaní, Casa Blanca, Granadilla, Trapiche, Santa Rosa, Cerrillo), ubicados a la entrada y cabecera del Valle de Ica y Caseríos, fueron prácticamente arrasados por los huaicos que cayeron desde los cerros aledaños. Lo mismo ha ocurrido con una parte del Distrito de la Tinguina, Parcona, Yauca del Rosario, Santiago, Los Aquijes, San Juan y Ocucaje.

El Mercado Mayorista Informal, que representa el 70 por ciento del comercio ambulatorio, fuente de empleo de gran parte de la población de la provincia, fue totalmente inundado y enlodado, perdiéndose casi toda la mercadería. Las tiendas del Comercio Mayorista, que funcionaban en la Avenida Grau y calles aledañas, también fueron prácticamente en su totalidad inundadas. La mercadería de alimentos, aparatos electrodomésticos, ropa y mercadería se perdieron. A ello habría que agregar la pérdida de los centros hoteleros que hoy se debaten en la más seria crisis.

En el sector Agrario fueron arrasadas aproximadamente 1,300 hectáreas de tierras de cultivo y unas 3,000 afectadas por la inundación y los huaicos, de un total de 37,000 hectáreas con que cuenta el Valle, perdiéndose gran cantidad de cultivos de algodón, panllevar, espárragos y frutales, sobre todo de los pequeños agricultores y parceleros que están en la ruina. Lo que además genera escasez de alimentos y de empleo en la población, especialmente entre la gran cantidad de trabajadores eventuales de la ciudad y el campo de Ica.

Además, el sistema de riego quedó colapsado por el arrasamiento de las bocatomas y el arenamiento de las principales acequias como la Achirana, con el riesgo que de 10,000 a 12,000 hectáreas de tierras de cultivo sembradas por pequeños agricultores se pierdan, ya que no cuentan con un sistema de riego de pozos tubulares. Las defensas del cauce de la ribera del río, en toda la zona que atraviesa la ciudad, han sido seriamente dañadas en diversos puntos.

En suma, tanto en la Ciudad como en el Valle de Ica, la catástrofe producida la coloca como una de las provincias más afectadas del Perú. El Gobierno Central debe calificarla en esta dimensión y



atender las demandas de acuerdo a esa realidad que ya excede la emergencia.

LA ACCION DEL GOBIERNO.

Ante la previsible inundación por el fenómeno del Niño, el Gobierno no estableció un Plan de Prevención de Desastres para Ica, debido a que pensaba que este fenómeno sería similar al de 1983. Bajo esta concepción, y a pesar de existir un aviso previo de inundación, en una muestra de improvisación e irresponsabilidad mayúscula, no se tomaron medidas de precaución significativas, a pesar de que existía un informe del Directorio del Proyecto Tambo Ccaracocha en el mes de setiembre de año pasado, señalando que las probabilidades de inundación y caída de huaicos en Ica eran altas, ante lo cual se planteó un plan de emer-

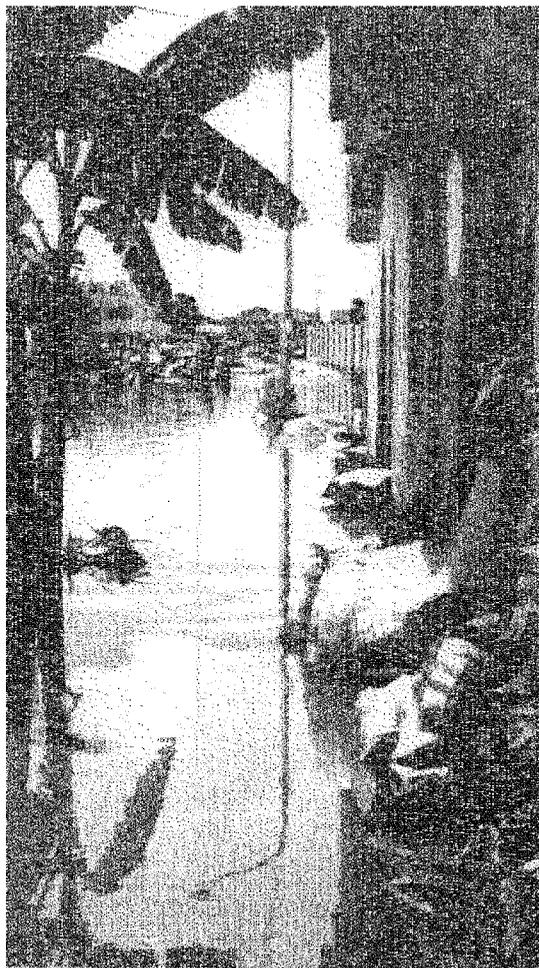
gencia por 10 millones de soles, que fue parcial y tardíamente atendido. De otro lado, el 23 de enero ya se había producido la primera inundación parcial de la ciudad con un menor caudal de aguas, es decir había un previo aviso de lo que podía ocurrir.

Esta negligencia gubernamental llevó a que la población fuera totalmente sorprendida por la lluvia, los huaicos y la inundación, y que las autoridades carecieran de un elemental plan de contingencia y defensa de la ciudad frente a una nueva inundación que era previsible. Resultado de ello es que en los tres primeros días posteriores al desastre, el Comité de Defensa Civil de Ica no se encontraba organizado ni contaba con la capacidad de actuar y socorrer a las familias iqueñas.

La escasa y limitada ayuda del gobierno central con que el presidente trató de minimizar el desastre, se ha circunscrito a atender la situación de emergencia de manera muy parcial. Hasta ahora no hay ni siquiera albergues o casas temporales para el 80 por ciento de los pobladores que perdieron sus viviendas. Refugios como la llamada Tierra Prometida, en pleno desierto, están desatendidas y las familias ubicadas allí están desengañadas de las promesas de las autoridades. La defensa ribereña sigue siendo igual de precaria que antes, y cualquier crecida significativa de las aguas va a ocasionar una nueva inundación. La SUNAT, insensible a la situación, postergó los pagos de impuestos un mes, pero ahora sigue presionando a los comerciantes, hoteleros e industriales arruinados. Los agricultores siguen desprotegidos. Y podemos afirmar que si hubo negligencia gubernamental para prevenir el desastre, ahora no hay una propuesta para la reconstrucción de Ica.

El gobierno, empeñado en minimizar los daños, declara a Ica como zona de emergencia, como si la situación fuera igual en Huancavelica, Ayacucho o Cuzco, que son comprendidos en dicho

dispositivo. Pero los daños muestran que lo que se ha producido en Ica es una *catástrofe o desastre*. Y por lo tanto requiere de un dispositivo que encare dicha situación. Sólo así se podrá destinar los recursos necesarios, pues algunos conservadoramente señalan que sólo el agro requiere de 25 millones de dólares para el proceso de reconstrucción. Pero, es evidente que dicho proceso, por la envergadura de los daños y las acciones de recons-



trucción, requiere de la formación de una entidad que se encargue de evaluar de manera precisa el impacto y, sobre todo, de diseñar y ejecutar un plan de reconstrucción que necesariamente es de largo plazo. Y en esto también el gobierno hace oídos sordos al reclamo de amplios sectores ciudadanos que exigen la formación de una entidad autónoma y con recursos para la reconstrucción, similar a la corporación que funcionó luego del desastre de

1963, que de paso hay que anotar que fue de menor magnitud que el actual. Obviamente, crear esta entidad es parte de un proceso de descentralización de recursos y decisiones que el hipercentrismo gubernamental no es capaz de implementar a pesar del sufrimiento y la tragedia de los iqueños.

LA PARTICIPACION CIUDADANA FRENTE AL DESASTRE: UN CAMINO PARA HACERSE ESCUCHAR.

Por ello la población iqueña siente que se encuentra en una situación de desamparo. En pleno proceso de emergencia, no sólo ha dado muestras de solidaridad y valentía, sino además desde el segundo día del desastre apoyado por ongs como EPRODICA, CEDEP, han iniciado la formación de una Coordinadora Vecinal de Familias Damnificadas, a través de la cual canalizaron sus demandas, y generaron un extraordinario proceso organizativo apoyándose en un empadronamiento, legitimando a los dirigentes vecinales para que se canalice ordenadamente las demandas y coordinar los diversos apoyos frente al desastre, logrando su incorporación a la Comisión de Organización de la Emergencia (COE); en coordinación con la iglesia y la municipalidad provincial.

Al final del primer mes, por iniciativa de la Coordinadora, se realizó la primera asamblea cívica y se formó el Frente

Cívico por la Reconstrucción y Desarrollo de Ica que aglutina a importantes líderes regionales, colegios profesionales, organizaciones vecinales y ongs. Este ha sido un paso sustantivo de la participación ciudadana de los iqueños.

El foro "Alternativas para la Reconstrucción y Desarrollo de Ica", realizado el mes de abril, constituyó un espacio de análisis y debate para formular propuestas de reconstrucción de la provincia de Ica.

Entre los principales planteamientos tomados en la reunión figuran:

- * La creación de una Entidad Autónoma que cuente con un Plan de Desarrollo a largo plazo.
- * Un Sistema de Administración Técnica de Agua e Irrigaciones, ante el ineficiente manejo de agua.
- * El desarrollo de políticas para la recuperación del empleo y la reconstrucción de la economía de la población urbana damnificada.